



El gobierno reconoce que debe mantener la deuda pública constante como porcentaje del PIB, pero en sus acciones pospone el esfuerzo para años futuros.

**ALEJANDRO
WERNER**

Deuda y Presupuesto 2026

Escribí recientemente sobre los dilemas que enfrentaba el gobierno en el diseño del Presupuesto 2026 y los resumí en la siguiente pregunta: ¿pueblo o mercados? Comentaba que el gobierno había realizado un compromiso “con los mercados” de reducir el elevado déficit heredado de la Administración anterior en dos años. Así, el déficit de 5.9 por ciento del producto registrado en 2024 llegaría a casi 3 por ciento del PIB en 2026. A través de su política de gasto el gobierno también tiene un compromiso con “el pueblo” de revertir parcialmente, o al menos no repetir, los importantes recortes presupuestarios que implementó en 2025, año en el que el déficit está disminuyendo en más de 1.5 puntos del producto.

Está claro que el gobierno se inclinó por el “pueblo” y les hizo una promesa a los “mercados” de que esta sería la última vez que no cumple con sus compromisos fiscales. El paquete económico para 2026 establece que en 2025 no se cumplirá con la meta de déficit y que

el objetivo de 3 por ciento se pospone de 2026 a 2028.

Además, en la construcción del paquete económico se utilizaron supuestos muy optimistas de crecimiento económico, lo cual incrementa artificialmente los ingresos, y se subestiman los pagos de pensiones, lo que artificialmente reduce el gasto, por lo que es muy probable que en 2026 volvamos a tener un déficit mayor al objetivo anunciado y superior al registrado en 2025. La dificultad de cumplir con la reducción del déficit originalmente planeada para 2026 es que para lograrlo el gobierno debería reducir el gasto programable respecto a lo ejercido en 2025 o incrementar los impuestos, alternativas que parecen políticamente inviables en la coyuntura actual.

Difícil pensar que en 2027 el gobierno, en un año de elecciones legislativas, decidirá actuar y reducir el gasto o incrementar los impuestos. Por lo tanto, el escenario más probable es que el déficit público supere 4 por ciento del

producto por varios años. La meta de 3 por ciento de déficit público se estableció porque de acuerdo a los cálculos de la Secretaría de Hacienda, con este nivel de déficit, la deuda pública no crece como porcentaje del producto. Es importante destacar que la capacidad del gobierno para pagar el servicio de la deuda depende del tamaño de la economía y por lo tanto lo importante no es que la deuda no crezca en términos reales sino que su crecimiento no sea consistentemente superior al crecimiento económico.

El gobierno reconoce la necesidad de mantener la deuda pública constante como porcentaje del producto, pero en sus acciones pospone el esfuerzo para años futuros. Esta actitud recuerda la célebre frase de San Agustín en el libro “Confesiones”: “*¡Señor, concédeme castidad y obediencia, pero todavía no!*”. Esta oración exhibe la ambivalencia de San Agustín, que reconocía la importancia de las acciones virtuosas pero no estaba listo para renunciar a los pla-



ceres más mundanos. A diferencia de otros gobiernos latinoamericanos que han caído en problemas de sostenibilidad fiscal, el nuestro reconoce la necesidad de estabilizar la deuda. La mala noticia es que parece que está decidido a probar los límites de la estrategia San Agustiniana posponiendo las medidas necesarias y utilizando mecanismos de financiamiento “que no son deuda pública”, como el que se anunció para saldar la deuda de proveedores de Pemex, hasta que los mercados se lo exijan.

De mantenerse déficits de entre 4 y 4.5 por ciento del PIB durante el resto del mandato y, apoyándose en vehículos de financiamiento cuasi fiscales, para el final del sexenio el nivel de deuda sería de alrededor de 60 por ciento del PIB. Esto pondrá en riesgo el grado de inversión, pero el acceso a los mercados financieros no se cerraría. Claramente, la estrategia es no alterar los delicados equilibrios de la coalición gobernante priorizando los objetivos políticos por encima de los financieros. Como consecuencia el costo de financiamiento de la inversión se elevará, limitando las posibilidades de crecimiento de la economía y aumentando los riesgos ante choques externos o deficiencias en los planes económicos, como la falta de cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico de Pemex.

*El autor es director fundador
de Georgetown Americas Institute.*